



**4. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.**

**4.3. PROPOSICIONES NO DE LEY ANTE EL PLENO.**

ILEGALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS SEPARATISTAS QUE ATENTEN CONTRA LA UNIDAD DE LA NACIÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. [10L/4300-0029]

**Escrito inicial.**

PRESIDENCIA

La Mesa del Parlamento de Cantabria, en su sesión del día de hoy, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento de la Cámara, ha acordado admitir a trámite ante el Pleno y publicar la proposición no de ley, N.º 10L/4300-0029, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a ilegalización de los partidos separatistas que atentan contra la unidad de la nación.

Los Grupos Parlamentarios podrán presentar enmiendas hasta las catorce horas del día anterior a la sesión en que haya de debatirse.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación, de conformidad con el artículo 102.1 del Reglamento de la Cámara.

Santander, 25 de octubre de 2019

EL PRESIDENTE DEL  
PARLAMENTO DE CANTABRIA,

Fdo.: Joaquín Gómez Gómez.

[10L/4300-0029]

"A LA MESA DEL PARLAMENTO DE CANTABRIA

El Grupo Parlamentario Mixto, en virtud al presente escrito y de conformidad con lo establecido en el artículo 176 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula la siguiente proposición no de ley, para su debate y aprobación en su caso en el Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En septiembre de 2017 el Parlamento de Cataluña aprobó la Ley 20/2017, de 8 de septiembre, de Transitoriedad jurídica y fundacional de la República. Una ley anulada por el Tribunal constitucional por atentar contra el orden constitucional.

Posteriormente, los partidos separatistas, el Gobierno de la Generalidad y el Parlamento de Cataluña convocaron un referéndum ilegal arrogándose unas facultades y competencias de las que carecían, violando la soberanía nacional, que reside en el Pueblo Español.

El referéndum tuvo lugar el 1 de octubre de ese mismo año como culminación de un proceso meditado y diseñado por los partidos separatistas catalanes, en connivencia con las asociaciones independentistas. Un proceso auspiciado y concebido desde las propias estructuras del Gobierno de la Generalidad. De esta manera, se hizo un uso ilegítimo de las propias herramientas del Estado para destruir el propio Estado y quebrar la unidad de la Nación.

El Grupo Parlamentario VOX considera necesaria y vital la unidad de la Nación y, para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de los españoles, la ilegalización de los partidos y asociaciones separatistas con el objeto de restaurar el orden constitucional en todo el territorio nacional.

De este modo, se dará cumplimiento al artículo 2 de la Constitución Española relativo a "la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles".

La ilegalización de partidos que pretenden la ruptura del Estado está contemplada en la Ley Fundamental de muchas naciones de nuestro entorno. Como, por ejemplo:

- La Constitución de Portugal (Art. 10.2) prohíbe la concurrencia a las elecciones de partidos que vayan en contra de la

unidad del Estado.

- La Constitución de Alemania (Art. 21.2) declara inconstitucionales los partidos que pongan en peligro la existencia de la República Federal Alemana.

Por otra parte, en fecha 27 de diciembre de 2001 se aprobó la Posición Común del Consejo (UE) sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo. Los artículos 3 y 4 de dicha resolución disponen que:

"Se entenderá por grupo terrorista toda estructura de más de dos personas, establecido durante cierto tiempo, que actúe de manera concertada con el fin de cometer actos terroristas. Por grupo estructurado se entenderá un grupo no formado fortuitamente para la comisión inmediata de un acto terrorista sin que sea necesario que se haya asignado a sus miembros funciones formalmente definidas, ni que haya continuidad en la condición de miembro o una estructura desarrollada.

La lista se confeccionará sobre la base de informaciones concretas o de elementos del expediente que muestren que una autoridad competente ha adoptado una decisión respecto de las personas, grupos y entidades mencionados, tanto si se trata de la apertura de investigaciones o de procedimientos en relación con un acto terrorista, como de la tentativa de cometer o de participar, o de facilitar dicho acto, basada en pruebas o en indicios serios y creíbles, o si se trata de una condena por dichos hechos."

El pasado 23 de septiembre, bajo las órdenes del Magistrado-Juez de la Audiencia Nacional, D. Manuel García-Castellón, se procedió a la detención de hasta nueve miembros de los denominados Comités de Defensa de la República en varias poblaciones de Barcelona. El Teniente Fiscal de la Audiencia Nacional informó que los miembros de los llamados CDR arrestados pertenecían al llamado Equipo de Respuesta Técnica y planeaban atentar en el segundo aniversario del intento de golpe de Estado en España el 1-O, así como en el día que se diera a conocer la sentencia del Tribunal Supremo sobre "El Procés".

Los acontecimientos vividos en el día de ayer en Cataluña, con actuaciones violentas y concertadas en estructuras estratégicas del Estado confirman, no solo la verosimilitud de la amenaza para el Estado y el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles, sino que el llamado "proceso separatista" está más vivo que nunca.

Según la Fiscalía, se detuvo al grupo "para abortar el proyecto que podría haber ocasionado daños irreparables" y ante "lo avanzado de los preparativos". Además, se les imputaron delitos de rebelión, terrorismo y tenencia de explosivos. La operación continúa bajo secreto de sumario.

Queda probado que se cumplen los requisitos para la inclusión de los CDR en la posición común de la Unión Europea como grupo terrorista. Según la Posición Común, se entiende por acto terrorista el acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a una organización internacional, tipificado como delito según el Derecho nacional, enumerando acciones típicas.

Asimismo, y como dijo el Tribunal Supremo en sentencia del 9 de febrero de 2012, "organizar equivale a coordinar personas y medios de la manera más adecuada para conseguir algún fin, en este caso, la perpetración de delitos, cuya ejecución se plantea de manera coordinada. Así, mediante la integración de sus miembros más funcional a tal objeto y, a través de la distribución del trabajo y de los recursos del modo más racional, se busca potenciar las posibilidades de actuación y el rendimiento de las aportaciones de aquellos."

Por lo tanto, queda claro que se cumplen todos los elementos del tipo penal recogido en el artículo 570bis del Código Penal, referente a organizaciones criminales, en relación y concordancia con los artículos 571 y 573 del mismo Código Penal, esto es:

- Agrupación de 2 o más personas entre las que exista cierta jerarquía.
- El carácter estable de la organización por tiempo indefinido, pues se trata de un acuerdo asociativo duradero y no puramente transitorio.
- Reparto de funciones de manera concertada y coordinada, con uso de los medios idóneos para el fin perseguido.
- Finalidad criminal: tener como fin la comisión de delitos.
- Delito grave contra la vida o la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo catastrófico, incendio, de falsedad documental, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones y explosivos.
- Con la finalidad de subvertir el orden constitucional o forzar o alterar sus instituciones; o alterar gravemente la paz pública.



Por todo ello, el Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente propuesta de resolución:

El Parlamento insta al Gobierno de Cantabria a que inste al Gobierno de la Nación a tomar las siguientes medidas:

1. Ilegalización inmediata de aquellos partidos separatistas que atenten contra la unidad de la Nación, con los instrumentos legales a su alcance o procediendo a las reformas legales que habiliten a ello.

2. Instar a la Unión Europea a que inscriba a los denominados como CDR (Comité para la Defensa de la República), en la lista de organizaciones criminales y terroristas, remitiendo a tal fin expediente con los datos relativos a la investigación judicial por la Audiencia Nacional.

3. Proceder de inmediato a suspender cualquier pago y, en su caso, a revocar y ordenar el reintegro de todo tipo de subvenciones o ayudas públicas que pudieran estar percibiendo de cualquier organismo público autonómico, los denominados CDR o cualquier otra asociación u organización que tenga relación directa o indirecta con la misma.

En Santander, a 15 de octubre de 2019.

Fdo.: Cristóbal Palacio Ruiz. Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto."